Más allá de la reforma constitucional de 1993

José Woldenberg-Karakowsky*

Barreda SOLÓRZANO, Luis de la, *La lid contra la tortura*, ciudad de México, Cal y Arena, 299 pp.

1. Escribe Luis de la Barreda Solórzano *{La lid contra la tortura*, Cal y Arena, ciudad de México, 1995, 299 págs.): "En el primer semestre de la existencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del total de quejas recibidas la tortura ocupó el segundo lugar dentro de los hechos presuntamente violatorios de derechos humanos, con 180 casos (13.4%); en el segundo semestre, el primer sitio, con 266 casos (13.9%); en el tercer semestre, el tercer escalón, con 156 casos (6.2%); en el cuarto semestre, el séptimo sitio, con 134 casos (2.9%); en el tercer año -suma del quinto y sexto semestre-, el séptimo puesto, con 246 casos (2.8%); en el cuarto año [...], el décimo puesto, con 141 casos (1.6%)", (p. 129).

Esas cifras nos informan de la persistencia de la tortura como fórmula criminal que utilizan diversas autoridades en su relación con individuos detenidos por muy distintas causas. Se trata de un expediente que, pese a estar prohibido en diversos ordenamientos legales (empezando por la Constitución), pese a que es repudiado públicamente por todos, pese a que se encuentra tipificado como delito sujeto a la pena de cárcel y a que nadie se atrevería a defenderlo públicamente, sigue reproduciéndose en los "separas" o las patrullas de la policía, las oficinas adjuntas a los ministerios públicos e incluso en no pocos reclusorios.

Resulta preocupante e infamante que siga sucediendo, pero nadie en su sano juicio se atrevería a negar la persistencia de tan brutal expediente. Pero las cifras que proporciona Luis de la Barreda también sirven para constatar otra realidad: sucesivamente el número de denuncias sobre torturas disminuye en términos absolutos

y, en términos relativos pasa incluso de los primeros lugares como fórmula violatoria de los derechos humanos, al décimo lugar. Es decir, que los esfuerzos desplegados contra la tortura, al parecer, están dando resultados. La movilización de las organizaciones no gubernamentales, la creación primero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y luego la de comisiones similares en cada una de las entidades de la República, más los cambios legislativos y una opinión pública más vigilante, parecen estar dando algún resultado.

Sería insensato, como lo señala BARREDA-SOLÓRZANO, echar a volar las campanas porque la tortura sigue marcando con fuerza al circuito diseñado para la impartición de justicia; pero sería igualmente enajenado negar los avances, así sean éstos parciales.

2. Si alguien está interesado en conocer el estado del arte en relación al debate jurídico-político sobre la tortura, el libro que comentamos es una guía ordenada, coherente, bien argumentada, de lo que se ha logrado y de lo que falta por hacer.

Barreda Solórzano sabe de lo que es capaz el derecho como modelador de muy distintas conductas y por ello pone énfasis en desentrañar los nudos y las limitaciones del mismo, en una perspectiva claramente reformista que utiliza la palanca del derecho para avanzar, en la construcción de una cultura que respete los derechos elementales y fundamentales de los hombres.

No obstante, sabe también que el derecho no lo puede todo, y que será necesario avanzar en otros terrenos para apuntalar y hacer realidad la letra de la ley. Son dos caras de una misma moneda, que con fines analíticos bien vale la pena observar por separado.

3. Si uno no lo leyera en el libro de BARREDA SOLÓRZANO, simple y llanamente no lo creería. Si bien

* Licenciado en sociología y Maestro en estudios latinoamericanos, profesor en la UNAM (FCPyS), Consejero ciudadano ante el IFE (Instituto Federal Electoral).

la tortura se encuentra prohibida desde la promulgación de la Constitución mexicana, la Suprema Corte de Justicia había establecido que si existían dos declaraciones de un inculpado, debería prevalecer la inicial, porque suponía que esa declaración se hacía sin los "malos consejos" de un asesor o un abogado. Ello se convirtió en una invitación a los malos tratos y a la tortura, que se cumplía sin falta en los subsuelos de nuestro sistema de "impartición de justicia".

Como escribe el autor, "al hacer prevalecer la Suprema Corte de Justicia la declaración ante la policía sobre la emitida ante la presencia judicial, nuestro máximo tribunal estaba convalidando los procedimientos atentatorios de los agentes policíacos para obtener 'confesiones'" (p. 82). Esa paradoja digna de Ripley, puede sintetizarse en los siguientes términos: a pesar de que "se sabía que en los separos policíacos se torturaba [...] con base en lo que hubiese declarado en esas condiciones (al inculpado) se le podía dictar una sentencia condenatoria" (p. 85). Por ello, la reforma constitucional, en la materia, en 1993, resultó tan relevante. Y con la precisión que lo caracterizaba, BARREDA SOLÓRZANO nos explica en qué consistió dicha reforma: "a) se quitó todo valor probatorio a la declaración del inculpado que no se emita en presencia de su defensor o persona de su confianza; b) se quitó todo valor probatorio a la declaración del inculpado emitida ante la policía, y sólo es válida la que se realiza ante el ministerio público o el juez de la causa; c) se estableció un plazo inequívoco, razonablemente breve, para la detención prejudicial" (p. 89). BARREDA sabía y sabe que para derrotar a la tortura no basta con buenas intenciones, sino con clamar o gritar al cielo. Son necesarias operaciones, como la que él impulsó en el terreno de las normas, para acorralarla. Así, ahora se requiere que el inculpado declare ante el ministerio público (no ante la policía) y en presencia de un abogado defensor o gente de su confianza, con lo cual el expediente de la tortura para "arrancar confesiones" pierde buena parte de su sentido. Si a ello le agregamos el plazo, para la presentación del detenido ante un juez, el círculo virtuoso puede cerrarse.

4. BARREDA SOLÓRZANO no se conforma, y con razón, con las reformas al texto constitucional, aunque sabe ponderar sus potencialidades y virtudes. En el libro que comentamos argumenta y propone una serie de medidas que tenderían a cortar espacio a la práctica ilegal de los malos tratos. Busca entonces hacer efectiva la presencia de una defensa efectiva a lo largo de todo el procedimiento judicial, desde que se detiene a un inculpado hasta que el juez y las instancias de apelación finalizan con sus trabajos.

Por desgracia, en ese terreno nuestras insuficiencias como país, las enormes desigualdades que cruzan a México, colocan a los inculpados, dependiendo de su condición social, en una situación altamente diferenciada. Aquellos que tienen recursos y conocen sus derechos en un extremo y aquellos otros, pobres y sin acceso a la información, en el otro. Esa dimensión cruza todas las relaciones sociales de nuestra sociedad, pero en el caso específico que comentamos, parece ineludible un programa para el reforzamiento y reforma de la defensoría de oficio, única institución que hasta hoy ofrece un mínimo de protección a los pobres y que se encuentran excluidos del conocimiento de sus derechos y de la posibilidad de contratar un abogado.

5. "Más allá de la ley", el profesor de la U.A.M. detecta factores "estructurales" que sería necesario retomar para aniquilar a la tortura. Desde la corrupción, la impreparación, los exiguos salarios, las tradiciones culturales (hay quien cree que es connatural y automático caer en manos de la policía y recibir una "calentadita") y hasta los "motivos psicológicos", gravitan sobre el tema.

Diversas reformas pueden y deben emprenderse, pero las cruciales serán aquellas encaminadas a acabar con la impunidad de los torturadores y sus jefes. Porque (creo) no se descubre nada nuevo si se afirma que es la impunidad de la que han gozado policías, ministerios públicos y/o celadores, la que alimenta la espiral perversa de la tortura. Por el contrario, si quienes cometen atropellos son sancionados, entonces el carácter ejemplar de esas sanciones deberá servir para desestimular el uso del triste expediente de la tortura.

Podríamos incluso afirmar que la impunidad es una invitación a seguir con la tortura, mientras que la sanción es el eslabón fundamental para erradicarla.

6. Lo que más me gusta de este pequeño gran libro es su tono enterado, puntual, sin grandilocuencias, de aquel que sabe que mucho se puede hacer por las causas si se las estudia, diagnostica y se procede a reformar o remover lo que agrede para abrirle paso a nuevas prácticas y relaciones. Es ese tono alejado de los catastrofismos autoconstruidos o de la parálisis a la que muchas veces lleva el sólo registro de los hechos, lo que hace de *La lid contra la tortura* un libro más que recomendable.

Porque a la tortura, sin duda, habrá que derrotarla. Pero para ello es necesario saber qué la pone en pie, cómo se reproduce y quiénes la frecuentan para, eslabón por eslabón, ir haciendo realidad una más que añeja aspiración: que los hombres sean tratados como tales.